

---

---

---

---

---

---

# ■ PLAZA DOMINICAL

Miguel Angel Granados Chapa

■ Acuerdos nacionales

■ Hacia la movilización social

**M**ientras los políticos se afanan en la discusión de formas, necesarias pero sólo parte de la realidad, trabajadores y campesinos parecen haber tomado la iniciativa. Se trata, por ahora, de huelgas y marchas parciales, con fines específicos, pero muestran que la inercia que ha afectado a las agrupaciones sociales pudiera haber llegado a su fin.

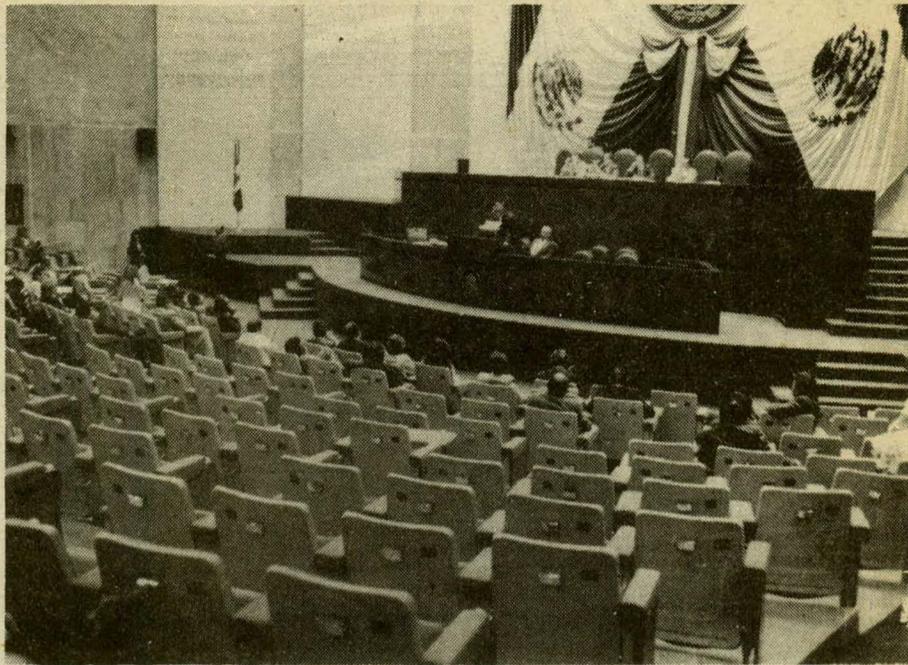
## PLAZA DOMINICAL

Viene de la 1

En Hermosillo estallaron medio centenar de huelgas, convocadas por la Confederación de Trabajadores de México. No es imposible que el líder nacional de esa central, Fidel Velázquez, se manifieste contrario a esas acciones. Ya en el pasado reciente hostigó a los trabajadores de la Cervecería Modelo, que integraban un sindicato cetemista, en vez de solidarizarse con ellos y conducirlos a la victoria, como cumple al líder verdadero de una central. Por lo pronto, las huelgas de Hermosillo parecen haberse emplazado sin autorización del mando nacional cetemista. Si fue así, tendríamos allí una señal de la marginación creciente del jefe de la confederación de Vallarta respecto de sus afiliados. Y es que se requiere tener la cara dura que tiene para anunciar un día que habrá emplazamientos a huelga por aumentos salariales de emergencia y decir lo contrario al día siguiente.

En la capital de Sonora las huelgas obreras dieron lugar a un paro patronal, que cesó ya aparentemente por la promesa de declarar la inexistencia de las huelgas cetemistas. Tampoco sería extraño que eso ocurriera. Sin fundamento legal las más de las veces, la Secretaría del Trabajo ha maniobrado para privar de sus derechos a los asalariados. Puede hacerlo una vez más, pues por encima de todo impera la idea de que se apliquen sobre los salarios los rudos efectos del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que sin embargo no ha servido para congelar los precios. Por eso los cetemistas de Hermosillo no resistieron más y entraron en una vasta movilización. Queda por ver cuál sería la reacción de la propia CTM local y de los sectores sociales que apoyan a los huelguistas, en el caso de quebrazón de sus movimientos y cancelación de su derecho. Queda por ver también si la actitud de los hermosillenses afiliados a la CTM se extiende a otros puntos del país. La causa existe en todas partes, por lo que pudiera extenderse a otras regiones. Salvo que haya habido un detonador puramente local.

Eso es posible. El gobernador Rodolfo Félix Valdés fue, desde siempre, un Ejecutivo débil, porque llegó al mando político local sin el asentimiento generalizado, por tratarse de un "sonorense de fuera". Su propia salud personal no ha ayudado a fortalecerlo. En Guaymas se ventila un intenso conflicto que, si bien excede los límites de la autoridad estatal —porque involucra a cooperativistas pesqueros cuya actividad se rige por disposiciones de dos secretarías de Estado, federales—, no deja de ser una fuente de conflicto cuya irresolución pesa sobre el gobierno de la entidad. La crítica aguda a la construcción de una carretera en que Félix Valdés puso amplias esperanzas políticas y los todavía no resueltos del todo problemas en el equipo del gobernador, integran también el expediente de sus dificultades. Colóquese dentro de ese caratapacio, en fin, el hecho de que el líder nacional del PRI y uno de los tres subsecretarios de Gobernación, elegidos ambos senadores en 1988 y citados como aspirantes al gobierno para 1990, tengan intereses encontrados, y se hallará que la movilización cetemista pudiera no tener sólo ribetes puramente laborales. No decimos por ello, conste, que carezca de justificación. La tiene plenamente,



Sesión nocturna del viernes en la Cámara de Diputados, sin las bancadas del PRD y del PPS ■ Foto: Angeles Torrejón

como la tendría en cualquier otro lugar, por la generalidad del fenómeno de empobrecimiento a que responde. Pero conviene encontrar los componentes del panorama, para ver el bosque y no sólo los árboles.

Si todo tuviera que ver con todo, acaso estuviéramos presenciando la colocación de la tramoya para que Félix Valdés dejará anticipadamente su cargo. Sonora puede ser un estado electoralmente muy conflictivo. Se le cita entre las entidades donde puede aparecer el segundo gobernador panista, que refuerce la hazaña conseguida en Baja California por Ernesto Ruffo. En esa entidad tal resultado no pudo ser impedido por la deposición del gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera. Pero el intento se hizo. Como se hizo también en el estado de México, con la remoción del gobernador Mario Ramón Beteta y la colocación de Ignacio Pichardo Pagaza en su lugar. Hay, pues, un mecanismo en cuya eficacia confía el PRI: impedir que un gobernador al que se considera incapaz de detener a la oposición, esté en su sitio cuando se produzcan acontecimientos electorales riesgosos. Si las huelgas de Hermosillo, junto con el resto de los ingredientes, se agravaran, quizá se creara la coyuntura para un reemplazo temprano en el Palacio de Gobierno sonorense.

Pero no perdemos la perspectiva de movilización social ante las penurias obreras de que necesariamente están impregnadas las huelgas de Hermosillo. Tienen móviles justos, como lo son también los de las marchas y otras acciones emprendidas esta semana por el Congreso Agrario Permanente. Campesinos caminando en carreteras de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro, etcétera, y conversando con altos funcionarios de la federación, son la viva imagen de la angustia campesina. La agenda que discuten proporciona un panorama claro, y preocupante en exceso, de su situación. Se trata, en primer lugar, de los precios de sus productos. Ese es su salario y, como toda remuneración al trabajo en el sexenio anterior y el presente, ha quedado rezagado respecto de sus costos y necesidades. Se trata también del crédito, o lo que resta de esa actividad concentrada en el Banrural. Es cierto que han venido implementándose programas de crédito a la palabra, sin intereses y con entrega inmediata. Pero son por fuerza de alcance reducido y, por ello,

insuficientes para hacer frente a las urgencias de financiamiento del trabajo rural.

Otras exigencias tienen que ver con la suerte personal de los campesinos. Siguen siendo fáciles víctimas de la arbitrariedad policiaca y judicial o de mecanismos de impartición de justicia que no comprenden y les son por naturaleza adversos. Sus movilizaciones de estos días han incluido también, por eso, la lucha por la libertad de personas presas con injusticia.

(Nótese que esta vasta movilización no ha incluido peticiones que hagan honor al concepto de armonía social que propone Televisa, en su ruborizante *videoclip* sobre la solidaridad. Según el teórico de ese consorcio que escribió el guión, o letra, del himno y que a la vista de la decrepitud histórica de Marx se lanzó rápido y orondo a sustituirlo, "el campesino y la gran empresa (están) unidos por naturaleza". Nadie, sin embargo, ha aprovechado sus conversaciones con funcionarios para proponer que se haga realidad esa vinculación descubierta por ese "privilegio de México", como desfachatadamente llamó Romeo Flores Caballero, secretario de Relaciones Internacionales del PRI, a Televisa).

La movilización campesina ha sido concertada por el CAP, pero cada una de sus agrupaciones integrantes está ventilando lo que es de su mayor interés. Se comprueba una vez más la ausencia de la Confederación Nacional Campesina, silenciosa e inerte, y el crecimiento en la escena pública de la UNORCA, la agrupación inspirada por el ahora subsecretario Gustavo Gordillo.

Los resultados de marchas y otras acciones son desiguales. A menudo se trata sólo de promesas que se les habían hecho antes y no se cumplen. En ocasiones, tales ofertas de solución avanzan cuando se les ponen plazos y modos. En otros casos ha habido acuerdos concretos. Pero más allá del desenlace de esta movilización, queda abierta la interrogante de hasta cuándo resistirá el trabajo rural la esquilmada a que se le sigue sometiendo.

Mientras obreros y campesinos luchan por sus intereses materiales inmediatos, los políticos que los representan, aspiran a hacerlo o dicen que lo hacen, ventilan las cuestiones que les son más inmediatamente preocupantes. Claro que el Congreso de la Unión pudo reu-

nirse, en este periodo extraordinario, para debatir cuestiones como las que exasperan a los huelguistas de Hermosillo o a los marchistas campiranos, pues había instancias de partidos de la oposición para ese efecto. Pero no, sólo se congregaron las Cámaras para comenzar la aplicación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (y el Senado para asignar la medalla Belisario Domínguez).

Cuajó una vez más, en la Cámara de Diputados, la alianza del PRI con el Partido de Acción Nacional. Llegaron a un acuerdo tanto en la forma como en el fondo y merced a ese consenso dejaron al resto de la oposición chiflando en la loma, incomodidad de la que salieron los diputados del *ferrocarril* y del PARM sumándose tardía y gratuitamente al acuerdo de la mayoría con la primera minoría. El más objetable de los candidatos a consejero magistrado, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, José Dávalos, quedó excluido del elenco de titulares, representantes virtuales de los ciudadanos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De ese modo, serán consejeros magistrados, por ocho años, Sonia Alcántara, Luis Espinosa Gorozpe, Manuel Barquín, Olga Hernández Estrada, Germán Pérez Correa (no su hermano Otón, con quien aquí mismo lo habíamos confundido) y Luis Tirado Ledezma.

Dos de ellos, Barquín y Pérez Correa, son profesores universitarios y los cuatro restantes, funcionarios de gobiernos estatales o el federal. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales resolvió presentar en su dictamen esta lista, en vez de dejar al pleno la deliberación sobre todos los demás candidatos, con lo que a juicio nuestro se limitan las posibilidades de un adecuado escogimiento.

Con la designación de esos consejeros magistrados, y la que hagan las Cámaras de sus representantes al Consejo General, se echará a andar en octubre el Instituto Federal Electoral, cuyo director general será, como anticipamos, el actual procurador del Consumidor, Emilio Chuayfett Chemor, y que tendrá a su cargo la organización de las elecciones federales en 1991. En el mismo año se realizarán comicios para designar gobernadores en siete estados (en algunos de los cuales habrá otras elecciones locales): Sonora, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Colima, San Luis Potosí y Nuevo León. En algunas de esas entidades bulle el ambiente preelectoral, no sólo dentro del PRI, sino también en la oposición, no obstante que faltan muchos meses para el momento electoral propiamente dicho, que deberá fijarse en cada caso, probablemente para que coincida con las elecciones federales.

El caso quizá más llamativo hasta ahora es el de Guanajuato, donde ya se perfilan las candidaturas de la oposición y no se ha resuelto la del partido oficial. El diputado federal por León, Vicente Fox, será, con muchas probabilidades, el aspirante a quien postule el PAN. El Partido de la Revolución Democrática, por su parte, designó ya al senador por el Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo. Independientemente de sus calidades personales y de sus condiciones legales, es una lástima que el PRD sea vencido por el priismo que es uno de sus ingredientes y proponga un acto de centralismo vitando. Pero habrá que volver sobre el caso.